



Lamentablemente el peso de los estereotipos y las generalizaciones acaban por esconder la diversidad, la complejidad y las transformaciones de la región latinoamericana. El subdesarrollo, la pobreza, la violación de derechos humanos y las democracias fallidas son los elementos que para buena parte de la opinión pública internacional, incluyendo la española configuran su realidad. Esta visión coincide igualmente en ignorar la diversidad y las diferencias entre países latinoamericanos, aunque éstas se den en todos los ámbitos. No cabe duda que las perspectivas posibles pueden ser muchas, pero también que hay datos objetivos que contradicen esta versión simplificada y dibujan una realidad más compleja y distinta.

Frente a esta idea derrotista predominante, América Latina vive su mejor momento desde el punto de vista del estado de sus democracias y de sus economías. Respecto a la seguridad esta prosperidad ha permitido un proceso generalizado de modernización de sus FAS y cuerpos de seguridad. Sin embargo todo ello no parece suficiente para resolver las amenazas transnacionales que atraviesan toda la región y en determinados países han desbordado prácticamente a sus Estados. El crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana son en este momento las principales amenazas a la seguridad en América Latina. Pese a los esfuerzos por tomar el control sobre estos problemas, lo cierto es que no se abordan de manera sistemática cuestiones que son fundamentales para erradicar estas lacras. Es absolutamente imprescindible la cooperación multilateral y la integración regional, así como reformas estructurales que lamentablemente tendrán efectos a medio y largo plazo, mientras que la ciudadanía exige resultados inmediatos.

En efecto, en la región convergen democracia y crecimiento económico. Dos logros que no siempre han coincidido en otras regiones emergentes como Oriente Medio o Asia. Hoy día es impensable el retroceso de la democracia en cualquier país latinoamericano y su crecimiento económico supera con diferencia el europeo y el norteamericano. El apoyo a la democracia ha alcanzado sus mayores cotas de apoyo, según el Latinobarómetro de 2010. Éste estudio se lleva a cabo desde 1995, en 18 países. El apoyo a la democracia en América Latina ha vuelto a crecer (61%) de la mano de la recuperación económica. Desde 2007 se ha detectado un crecimiento gradual y sostenido. En todos los países la satisfacción con la democracia es superior a la registrada en la primera encuesta y también a la realizada a principios de la década de los 2000. Pero al apoyo y a la consolidación de democrática es preciso sumar el auge económico que viven estos países. Los pronósticos que suponían que la región sería particularmente vulnerable a la crisis internacional se equivocaron por completo. Se ha mantenido un crecimiento

ascendente entre 2003 y 2010, a excepción de 2009. Y la tasa del 5 % del pasado año le permite liderar, junto a Asia la recuperación de los mercados internacionales. Esta situación no sólo se debe a la demanda creciente de productos de materias primas, procedente de Asia, sino también es resultado de una década, la de los noventa, donde la mayoría de los países apostó por una férrea disciplina macroeconómica, equilibrios fiscales, acumulación de reservas y control de la inflación.

En ese contexto, desde el punto de vista social, la región estaría retomando la tendencia a la reducción de la pobreza que venía observándose desde 2003 y la disminución de los índices de desigualdad, con un aumento en los ingresos de las familias pobres y en el desarrollo de políticas sociales. Según el informe de 2010 de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la combinación entre el aumento en los ingresos laborales de los hogares pobres y las transferencias públicas, orientadas a aminorar el impacto de la crisis, permitió reducir la desigualdad en la región.

Todos estos datos son indiscutibles y forzosamente sus positivos resultados serán más evidentes en los años venideros. Sin embargo, ninguna realidad es blanca o negra. Es evidente el proceso de consolidación de las democracias latinoamericanas, durante la última década, pero no hay que soslayar las importantes diferencias que existen entre los países de la región, ni tampoco desconocer los importantes desafíos que aún están pendientes. El aumento sostenido del apoyo y la satisfacción con la democracia, durante los últimos años, muestra una mayor congruencia entre las demandas de los ciudadanos y las respuestas de los gobiernos a las mismas. Igualmente esta situación de prosperidad económica generalizada, que no es igual en todos los países, sólo será importante si se emplea para implantar cambios estructurales que aseguren un crecimiento económico sostenido para reducir la pobreza y la desigualdad, pues pese a los datos positivos en este sentido, continúan siendo también los problemas fundamentales de la región, particularmente éste último.

SEGURIDAD E INTEGRACIÓN

A esta situación de prosperidad y optimismo actual, en materia de seguridad cabe añadir la pacífica, si bien no idílica, convivencia vecinal. América Latina apenas ha sufrido conflictos bélicos a lo largo del siglo XX. Los más recientes serían la “Guerra del fútbol” entre Honduras y el Salvador, en 1969, que duró 6 días o la guerra del Cenepa, entre Ecuador y Perú, en 1995, que se prologó durante cinco semanas, siendo los enfrentamientos interestatales más destacables.

A ello hay que sumar que, pese a esta baja conflictividad, prácticamente en todos los países de la región se ha iniciado un proceso de modernización de sus FAS. A partir de mediados de la década de 2000 se viene realizando un importante esfuerzo por renovar el equipamiento militar, para adaptarse a los nuevos escenarios nacional e internacional. Una tendencia que contrasta con la marcada evolución decreciente que experimentaron las partidas presupuestarias destinadas a la defensa desde la transición democrática, a partir de la década de los noventa. Buena parte de estos nuevos recursos se han destinado a la renovación de armamento y de equipamiento militar obsoleto, pero hubiera sido de desear que esta modernización también hubiese tenido lugar en el ámbito de las relaciones civiles-militares, con el fin de lograr de manera definitiva el control civil. Una cuestión que no está resuelta del todo

en la región y que es imprescindible para la consolidación de la democratización de la defensa. Aunque como siempre habría que establecer diferencias según los países.

En cualquier caso y pese a todas estas características y factores, en los últimos años, una importante corriente de opinión viene insistiendo en el inédito nivel de división y tensiones que atraviesa la región. Sin embargo también hay argumentos suficientes para cuestionar esta afirmación. Ciertamente no es posible negar la existencia de divisiones y diferencias, pero sin duda hay que relativizarlas y sobre todo en valor la capacidad de los países latinoamericanos para resolverlas. Las principales diferencias son debidas a conflictos fronterizos y no son ninguna novedad, pues han mediatizado las relaciones de buena parte de los países latinoamericanos con sus vecinos, en algunos casos desde el siglo XIX. Así mismo cabe destacar las de carácter ideológico. Estas últimas son más novedosas y surgen, para algunos observadores, desde el momento en que Hugo Chávez adquiere cierto liderazgo en la región y además un grupo de países se alinean en torno a la Alternativa Bolivariana de los Pueblos para Nuestra América (ALBA), iniciativa del mismo presidente Chávez. Las posibles divisiones regionales suscitadas por estas diferencias ideológicas tienen difícil solución, ya que estos gobiernos actuales, tanto de países miembros del ALBA o no, han sido elegidos por voluntad popular y en alguna ocasión repetidamente como ocurre en Venezuela, Bolivia y Ecuador.



Sin embargo, llegados a este punto cabe quizás también relativizar el nivel de división generado por estas diferencias ideológicas. En primer lugar no hay que olvidar que todos los países sudamericanos del ALBA, son miembros del resto de iniciativas y organismos no sólo sudamericanos, sino también latinoamericanos, e incluso hemisféricos (ámbito en el que se incluye a Estados Unidos y Canadá). Lo que significa que pese a indudables diferencias y tensiones, éstas no hacen incompatibles la participación de dichos países en otras iniciativas

regionales o subregionales más allá del ALBA. Esta cuestión no es baladí ya que la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)¹, o incluso la Organización de Estados Americanos (OEA) han sido foros donde se han dirimido diferencias y divisiones en las que se encontraban implicados también países miembros del ALBA.

Pero si parece difícil encontrar ejemplos en los que, por las diferencias ideológicas señaladas pudiera hablarse, como algún analista ha sugerido, sobre un posible enfrentamiento de bloques en la región, por ejemplo UNASUR versus ALBA; igualmente difícil aún resulta imaginar un enfrentamiento armado ente dos países. No cabe duda que ha habido importantes tensiones. En este sentido, el caso más paradigmático es el de Venezuela y Colombia, pero es también el más extremo y singular. No obstante aunque algunos el año pasado hacían cálculos sobre una posible invasión de Colombia, por su vecino venezolano, se ha demostrado nuevamente la capacidad en la región para recomponer las relaciones entre países y en la actualidad las relaciones han mejorado ostensiblemente.

Para muchos parece fácil imaginar un acuerdo como el que se acaba de celebrar entre Colombia y Perú, para combatir de manera conjunta el narcotráfico, pues en este caso habría una afinidad ideológica entre los países vecinos. Sin embargo también se están realizando importantes acuerdos para la estabilidad regional, entre los países miembros del ALBA y sus vecinos, pese a sus diferencias ideológicas y a sus largos conflictos fronterizos. Según la visión que supone esta inédita, por acusada, división regional parecería imposible imaginar el reciente acuerdo entre Perú y Bolivia, mediante el cual se hace posible la construcción de un puerto de salida al mar para Bolivia en territorio peruano. Como ya ha sido mencionado, igualmente importante parece la recomposición de las relaciones entre Colombia y Venezuela, muy deterioradas en los últimos años y que están experimentando una extraordinaria mejoría. Más significativo aún, por la trascendencia de la crisis suscitada a partir de la operación militar colombiana contra las FARC en territorio ecuatoriano, es la normalización de las relaciones entre Ecuador y Colombia.

Todos estos hechos no dejan de ser logros de la región, que pese a las diferencias entre algunos de los países que la componen, son capaces de recomponer sus relaciones y/o mejorarlas. Por supuesto que las tensiones, divisiones y diferencias no son deseables y ciertamente las hay, pero no paralizan las relaciones intrarregionales ni bilaterales de la región. De ahí que pese a la división, lo trascendente sea resaltar la capacidad para superarlas. Y en esta resolución de conflictos la UNASUR ha tenido una participación e influencia considerables. En este sentido no puede dejar de mencionarse la importante del liderazgo de Brasil, que ha sido quien ha impulsado la creación y avance de UNASUR, además de jugar, de manera muy inteligente, un importante papel como potencia mediadora. En ese sentido es particularmente destacable la capacidad que el Presidente, hasta hace muy poco, Lula da Silva, ha tenido para moderar propuestas e iniciativas del Presidente Hugo Chávez que de otra manera hubiera generado importantes divisiones.

La insistencia en analizar bajo una perspectiva crítica las visiones alarmistas, no significa negar las diferencias de la región, ni sobre todo las repercusiones que ello tiene en la seguridad del

1 La UNASUR, producto de una iniciativa brasileña, es una organización formalizada en mayo de 2008 y está compuesta por 12 países sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Surinam y Guyana).

área. A pesar de poder evidenciar la capacidad de la región para evitar situaciones de grave tensión, que incluso pudieran desembocar en conflictos interestatales, lo cierto es que hay que admitir que la cooperación bilateral y particularmente multilateral no es realmente la deseable.

Por último, una cuestión que es absolutamente imprescindible para tener éxito en el principal problema de seguridad que, aunque en diferente medida, afecta sin excepción a todos los países latinoamericanos es el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas o maras. Aunque en realidad en la mayoría de los casos no puedan considerarse como departamentos estancos, pues unos y otros se encuentran íntimamente relacionados.

CRIMEN ORGANIZADO, NARCOTRÁFICO E INTEGRACIÓN

El objetivo de estas páginas no es plantear un mundo idílico, sino criticar estereotipos y simplificaciones. Desde hace algunos años, el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, junto al desempleo, son los principales problemas de las agendas gubernamentales en toda la región. Máxime cuando más allá de los datos reales, la percepción social en América Latina es que el 91% de los latinoamericanos se sienten amenazados, con más o menos intensidad, por la violencia existente. Bien es cierto que esta afirmación exige un examen por países que pondría de manifiesto las diferencias dentro de la región. Pero pese a dichas diferencias, tanto a nivel latinoamericano como por países, la violencia generada por el crimen organizado, el narcotráfico y las maras son sin duda las principales preocupaciones percibidas por la población.

América Latina tiene uno de los niveles de violencia delictiva más altos del mundo. Con sólo 8.5% de la población mundial, concentra cerca de 27% de los homicidios dolosos a nivel global. Cada año cerca de 200 millones de latinoamericanos y caribeños —un tercio de la población total de la región— son víctimas, directamente o en su núcleo familiar, de algún acto delictivo. En lo que va de la presente década más de 1.2 millones de personas han perdido la vida como resultado de este tipo de violencia, gran parte de ella ligada a actividades criminales transnacionales. Por todo ello no nos debe extrañar que a los latinoamericanos les preocupe más la delincuencia (27%) que el desempleo (19%).

Hasta el momento, pese a los esfuerzos realizados para combatir estas amenazas, lo cierto es que el problema no ha dejado de incrementarse. No hay una respuesta sencilla cada vez que se formula la pregunta sobre las causas de esta violencia. Máxime ahora cuando los datos políticos, sociales y económicos son inmejorables en la región. Bien es cierto que existen países donde dichos índices de inseguridad no son tan altos, como en Chile o Costa Rica, países que por otra parte destacan por su nivel de crecimiento y bienestar respecto al resto de la región. Sin embargo, no parece que los problemas económicos sean una explicación suficiente para entender las causas de esta lacra, pues Bolivia o Nicaragua, por ejemplo, poseen índices de inseguridad inferiores a sus vecinos más próximos, y sin embargo se encuentran entre los países más pobres de la región. Esta comparación pone de manifiesto la complejidad del problema y la imposibilidad de explicarlo mediante un único factor. Es preciso tener en cuenta numerosas variables de diferente naturaleza y así aunque la pobreza pueda ser un motivo, no es el único ni necesariamente el principal.

En cualquier caso además de su explicación, no puede dejar de examinarse su solución. Hasta el momento la respuesta más frecuente ha sido recurrir fundamentalmente a medidas represoras, implicando para ello no sólo a las fuerzas de seguridad sino también a las FAS. El caso mexicano ilustra muy bien que este tipo de política puede ser incluso contraproducente. En cualquier caso este no es el único problema, ya que no hay suficiente colaboración y cooperación bilateral y multilateral y el Estado es estructuralmente débil, aunque siempre deba tenerse presente las diferencias entre países. Todos estos factores obstaculizan el combate de los problemas señalados.

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN

No hay ninguna duda que sin cooperación no cabe posibilidad alguna de combatir el problema y hasta el momento la cooperación multilateral. Así respecto a la cocaína, por ejemplo, dicha cooperación entre países productores y de tránsito ha sido prácticamente anecdótica. Recientemente Nilda Garré, ex Ministra de Defensa argentina, afirmaba con rotundidad el intenso nivel de cooperación que había en la región. En realidad la ministra se refería a las relaciones de Argentina con Chile y Brasil. De manera que aunque no hay que minimizar los resultados de la cooperación incluso en esta área domina la bilateral y no la multilateral.

El carácter transnacional de estas amenazas y el rápido desarrollo de amplias redes en la región hace inútil combatirla de manera particular, en cada territorio nacional. El crimen organizado, en este sentido, es uno de los mayores problemas actuales que padece América Latina, pero al mismo tiempo su combate puede ser un elemento que favorezca la cooperación y la integración. De hecho si no es de manera conjunta y coordinada no es posible combatirlo. Y de ello pareciera que toman conciencia, incluso aquellos países que, por las circunstancias que sean, han estado más alejados de la región. No cabe duda que el narcotráfico obligará a México y Colombia a intentar establecer vínculos de cooperación con el resto del área. Pero no sólo son éstos los países afectados. El resto de la región también lo está, y aunque algunas repúblicas lo estén más que otros, como es el caso mexicano y colombiano, es un tema ineludible para todos.

Es mucho lo que se juega la región, y el tradicional nacionalismo y el principio de no intervención empleado, sin excepción, por todos los países latinoamericanos para limitar o directamente bloquear iniciativas de cooperación o integración puede impedir la colaboración necesaria. Son innumerables los discursos dedicados a la cooperación por parte de todos los gobiernos latinoamericanos, aunque lamentablemente no hayan ido más allá de la mera retórica. Es preciso concretar políticas de cooperación que, además, a la larga contribuirán a la integración subregional. El crimen organizado y el narcotráfico son una amenaza común y su combate pasa inexcusablemente por el trabajo conjunto. Su carácter transnacional y el rápido desarrollo de amplias redes en la región hacen inútil combatirlas de manera particular, en cada territorio nacional.

En este tiempo, las amenazas a la seguridad tanto interior como exterior han ido cambiando. Desde la transición democrática, el crimen organizado y el narcotráfico han adquirido espacios cada vez mayores. Mientras esto ocurría, además se pensaba que era Colombia quien tenía únicamente el problema. Un problema incómodo para sus vecinos, pero quizás tanto o más la presencia extranjera, justificada para contribuir a su combate. En este sentido Estados Unidos

llegó a convertirse en el aliado natural de Colombia. Sin embargo, la actitud de rechazo a la presencia norteamericana, por buena parte de sus vecinos sudamericanos, no hizo más que alimentar la colaboración norteamericana ante la soledad experimentada por Colombia en la región. Decisión que a su vez, ha generado más desconfianza en el área; alimentándose así una dinámica de aislamiento difícil de romper, de la que ambas partes son responsables.

Ahora la situación es muy diferente. Ya no puede señalarse Colombia como un caso aislado. En efecto es excepcional, ya que persiste un conflicto abierto entre el Estado y una organización guerrillera, pero las motivaciones de esta guerrilla, o narcoguerrilla, para continuar este conflicto, no son muy distintas a las de las organizaciones de narcotraficantes instalados en el resto de la región. En la actualidad, las redes de narcotraficantes y del crimen organizado son transnacionales y atraviesan a toda la región sudamericana.

Es preciso empezar a concretar de manera sistemática esta preocupación mediante la cooperación y la colaboración entre países. La posición opuesta es estéril, pero no es fácil de superar. Será un proceso lento y complejo, aunque no por ello han de negarse avances. No cabe duda que hay interesantes iniciativas y cada vez más abundantes. Parece particularmente interesante destacar el desarrollo de convenios de cooperación de países como Colombia y México. El interés es debido a que México, aunque por diferentes motivos, también ha mirado más a los Estados Unidos que a América Latina. Cuestión que le ha propiciado cierto aislamiento regional. México desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos decidió volcar su relación con su vecino del Norte y desatender su posición y relaciones con el Sur. Si bien en todos los discursos presidenciales tradicional y persistentemente se ha mantenido un discurso retórico orientado a recuperar las relaciones con las repúblicas hermanas de Iberoamérica. Por este motivo, parece interesante seguir iniciativas como las ocurridas en 2010. A finales del mes de junio, prácticamente al mismo tiempo, México y Colombia celebraron acuerdos de cooperación con Bolivia y Honduras, respectivamente, para combatir el narcotráfico. La dimensión que ha adquirido este problema en territorio colombiano y mexicano le ha convertido en una prioridad para estos Estados, obligándoles a tomar conciencia que para combatirlo es imprescindible la cooperación transnacional.

Otro ejemplo destacable es la decisión inédita adoptada por los gobiernos de Brasil, Perú y Bolivia de celebrar una reunión tripartita para coordinar acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y la seguridad en sus fronteras. Según las autoridades bolivianas, la fuerza antidrogas de Bolivia decomisó en lo que va del año unas 27 toneladas de cocaína de las que casi un 50 por ciento procedía de Perú y tenía como mercado de destino a Brasil.

Aunque de manera no planificada ni coordinada, cada vez son más abundantes los acuerdos bilaterales entre países de la región, afectados de distinta manera por el narcotráfico. En este caso el carácter tripartito da al futuro acuerdo esta naturaleza excepcional. Cabe esperar que esta tendencia favorezca forzosamente avances conjuntos y multilaterales. Sin embargo para ello necesariamente deberá moderarse el tradicional nacionalismo y el principio de no intervención empleado, sin excepción, por todos los países latinoamericanos para limitar, o directamente bloquear, iniciativas de cooperación o integración imprescindibles para lograr la colaboración necesaria. La UNASUR y su consolidación pueden ser fundamentales para avanzar en este sentido. Entre sus preocupaciones se encuentran el narcotráfico y el crimen organizado,

como así han puesto de manifiesto sus países miembros. No obstante, es momento de empezar a concretar de manera sistemática políticas subregionales o regionales para combatir esta amenaza. Las redes del crimen organizado llevan mucha ventaja en este aspecto a los Estados.

En este sentido, la contribución de la UNASUR puede ser importante. Entre sus preocupaciones se encuentran el narcotráfico y el crimen organizado, como así han puesto de manifiesto los países miembros. En este ámbito en concreto el Consejo de Defensa Sudamericano, creado en su seno, tiene importantes retos que asumir. En el proyecto de UNASUR la seguridad es un pilar fundamental de la cooperación y en poco tiempo se han registrado importantes avances. De profundizar la colaboración en este sentido se pondría en evidencia la posibilidad de configurarse nuevos modelos de integración distintos al europeo, además de otros logros como el desarrollo de una metodología de medición de gastos de defensa y la realización de estudios sobre las capacidades existentes en el ámbito militar para apoyar las acciones humanitarias.

El CDS tampoco ha podido eludir el problema del crimen organizado. Para ello ha incorporado recientemente a los Ministerios de Interior de los países miembros para intentar con un plan propio reducir la oferta y la demanda del mercado de la droga. Esta propuesta incluye estudios para la formulación de programas de prevención y rehabilitación. Pero tan importante como todo ello es la necesidad de incrementar la cooperación y el intercambio de información para el control y la fiscalización de la producción, comercialización, almacenamiento y distribución de drogas y precursores químicos para su elaboración. Aspecto que igualmente ha sido también contemplado en el plan mencionado.

MEDIDAS REPRESORAS Y DEBILIDAD ESTATAL

A la falta de cooperación es preciso añadir el empleo de medidas represoras para combatir la violencia. Una política que aunque necesaria requiere de otras reformas estructurales imprescindibles para acabar con las causas que generan dicha violencia.

La mayoría de los gobiernos latinoamericanos se encuentran desbordados por el problema e incapaces cuanto menos de controlarlo, pese a que han realizado importantes esfuerzos por aplicar medidas de seguridad y represión para ponerles freno. La impotencia gubernamental ha provocado que no sólo sean las fuerzas policiales quienes se encuentren volcadas en combatir esta delincuencia, sino que también lo hagan las fuerzas armadas. Una medida que aunque sea popular entre la ciudadanía latinoamericana, ya que sufre a diario esta amenaza y exige soluciones inmediatas, puede tener importantes consecuencias políticas e institucionales, pues se corre el riesgo de militarizar la seguridad interior y los espacios de actuación destinados a autoridades civiles. Esta posibilidad es mayor en países donde hay una debilidad institucional de carácter estructural, como es el caso de buena parte de los Estados latinoamericanos. Sin embargo esta no es la única consecuencia. Los limitados resultados de la represión del crimen y la desprotección ciudadana ha decidido a muchos ciudadanos a hacerse con un arma. En definitiva se alimenta una espiral que puede acarrear graves consecuencias ya que redundan en uno de los principales motivos que explican el aumento exponencial que ha experimentado la delincuencia en América Latina: la debilidad estructural del Estado.

Con ello no se pretende negar la necesidad de aplicar medidas de carácter represivo, como parte de la solución, cuando además cuenta con el respaldo ciudadano. Pero en la medida en que no se apliquen políticas a más largo plazo, concentradas en fortalecer las estructuras estatales y los diferentes problemas que afectan a estas sociedades únicamente se alimentará una dinámica que sólo empeora el problema al que se pretende dar solución. Estas medidas de carácter estructural afectan a numerosos ámbitos, como los relacionados directamente con los mismos cuerpos de seguridad, el sistema judicial o el penitenciario. Y en general un proceso de institucionalización que necesariamente cambie la cultura política de gobernantes y gobernados. Pero no cabe duda que la aplicación de programas sociales destinados a erradicar la inequidad o reformas educativas también forma parte del proceso necesario para acabar las causas que favorecen violencia y la impunidad. Si recapitulamos todos los elementos precisos para acabar con el crimen organizado y la violencia todo pasa necesariamente por fortalecer el Estado.

Esta debilidad estructural del Estado permite al crimen organizado corromper funcionarios y políticos, de los tres poderes constitucionales, a la policía e incluso a las FAS, cuando están implicadas también en el combate de estas amenazas. Además de lograr el total control de grandes extensiones de territorio donde el Estado no es capaz de llegar. No que las causas de la violencia y la inseguridad son múltiples cabe duda que la explicación ha de ser multicausal. Sin embargo, es imprescindible la construcción de Estados sólidos y fuertes, capaces de establecer el imperio de la ley en todo su territorio. Y para ello es igualmente necesario que sus representantes estén convencidos de que esa es la única manera de gobernar. De otra manera la violencia permanecerá en las sociedades latinoamericanas.

El objetivo de estas páginas ha sido plantear una visión global de la región mediante una visión crítica sobre buena parte de los tópicos que pesan en torno a la realidad latinoamericana. La consecuencia de las generalizaciones realizadas bajo estos tópicos reproduce de manera sistemática una realidad simplificada, en la que nada cambia y donde la región se ve siempre abocada al fracaso. Frente a esta idea ha habido importantes cambios en todos los ámbitos. Y en este momento dichos cambios están dando buenos resultados. Esto no significa que permanezcan serios problemas y en particular en el ámbito de la seguridad. Frente a la emergencia de soluciones sin embargo las políticas desarrolladas hasta el momento no parecen muy eficaces. Los niveles de violencia siguen creciendo e incluso la crueldad con la que se ejerce.

En este momento, pese a la insistencia, por algunos analistas, del alto nivel de división existente en la región, por conflictos fronterizos e ideológicos, los problemas más graves de seguridad en la región son crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas o maras. Sin embargo para combatir estas amenazas no es suficiente con políticas represivas, máxime cuando hay problemas estructurales de fondo que de no resolverlos no podrán al menos tomar control sobre estos problemas. De hecho si por varios motivos estaría justificada la cooperación y la integración, el combate de amenazas transnacionales hace imprescindible este proceso. Por ello las tradicionales desconfianzas y los fuertes nacionalismos que caracterizan a la región no serán más que un obstáculo para construir una cooperación multilateral imprescindible. Como se ha señalado hay algunas iniciativas pero no son suficientes. Cabe esperar que la UNASUR sea una palanca fundamental para el desarrollo de esta necesaria cooperación.

Sin embargo además de esta cooperación se precisa cuerpos de seguridad profesionales. En este sentido la tendencia en la región de implicar a las FAS no parece la medida más oportuna. Es un espacio de seguridad interior, se corre por tanto el riesgo de militarización de un espacio civil y el de la misma desprofesionalización militar, ya que no están entrenados para estas funciones. Pero más allá de quien participe en las medidas represivas adoptadas lo cierto es que sus limitados resultados, demuestran que no son suficientes. Es preciso aplicar medidas de desarrollo estructural, para las que la integración es igualmente fundamental. Sin embargo cada una de estas medidas no podrá abordarse sin que previamente no se fortalezca el Estado y se consolide un proceso de institucionalización, ya que la debilidad estructural del Estado, en mayor o menor medida, según los países, en buena parte explica tanto el origen de estos problemas como las limitaciones para resolverlos.

Sonia Alda Mejía²
Profesora- Investigadora
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

2 Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.